ANÁLISIS Y OBSTÁCULOS QUE PRESENTA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

JENNY JAZBLEIDY VELASQUEZ VELÁSQUEZ

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FAULTAD DE DERECHO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO
VILLAVICENCIO
2014
ANALISIS Y OBSTACULOS QUE PRESENTA LA RESTITUCION DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

JENNY JAZBLEIDY VELASQUEZ VELÁSQUEZ

Informe final para optar el título De Especialista En Derecho Administrativo

Tutor(a)
Mg. LAURA MILENA MALAGÓN RUBIO
Magister en Derechos Humanos

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FAULTAD DE DERECHO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO
VILLAVICENCIO
2014
Autoridades Académicas

P. CARLOS MARIO ALZATE MONTES., O.P.
Rector General

P. EDUARDO GONZALEZ GIL., O.P.
Vicerrector Académico General

P. JOSE ANTONIO BALAGUERA CEPEDA., O.P.
Rector Sede Villavicencio

P. ALVARO JOSE ARANGO RESTREPO., O.P.
Vicerrector Académico Sede Villavicencio

AB. GILMA YAMILE CUBILLOS
Secretaria de División Sede Villavicencio

Mg. SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO
Decana Facultad de Derecho
Nota De Aceptación

SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO
Decana Facultad de Derecho

LAURA MILENA MALAGÓN RUBIO
Director Trabajo de Grado

Villavicencio, Octubre de 2014
### Contenido

<table>
<thead>
<tr>
<th>Capítulo</th>
<th>Pág.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Resumen</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Introducción</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Planteamiento del problema</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivos</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo General</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivos Específicos</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Justificación</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Hipótesis</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Reconstrucción normativa y jurisprudencial</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 Sentencia C-099/13.</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Reconstrucción de derecho comparado</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 Sentencia C-715/12</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Reconstrucción teórico-conceptual</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1 Sentencia C-253A/12</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Marco teórico</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado: “VI Informe a la Corte Constitucional”. 2008</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Reparación administrativa: de las víctimas menores de dieciocho años</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1 De las víctimas adultas</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2 Edición N° 00322 – Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2012:33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Validación de la hipótesis</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Conclusiones</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Bibliografía</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Resumen

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una política pública y describen acciones que desde el Estado ha llevado como estrategia de voluntad de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, siendo un mecanismo de la política transicional que facilita el paso a los escenario de pos conflicto, reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano y sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, pero la aplicación de la misma no implica que tenga una exitosa práctica, menos cuando en Colombia permanece el conflicto armado, político y socioeconómico.

Mediante la Ley 1448 de 2011, modificado en reglas clásicas del Derecho Civil, al establecer presunciones de ilícito de las compras de tierras en ciertas zonas de violencia y desplazamiento, se logra analizar su aplicación como referentes a la hora de evaluar intenciones a favor de las víctimas fundamentalmente en la zona rural por el modelo de desarrollo económico imperante, que termina por impedir la reparación integral de esas víctimas, siendo un proceso tortuoso en donde se visualizan aspectos de imposibilidad; pero tratado de brindar una solución transparente alrededor de los que aspiran a la restitución; también porque el proceso puede revivir pasiones y generar desgarros entre grupos sociales que si bien no ha sido violento, han sido víctimas y beneficiarios de esa violencia, y logrando comprar, quienes eran sus aliados o testaferreros, pero también quienes podían convivir con los guerrilleros, entre ellos habitantes de la zona que aprovecharon la situación para invadir y apropiarse de la tierra que había quedado vacía.

La restitución de tierras es la medida preferente para reparar a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo, pero en forma subsidiaria se establece una compensación o el pago de un valor equivalente, pero la solución no solo es la devolución de las tierras despojadas a los campesinos, es tan solo una parte del camino, es allí donde el presente proyecto centrará su vitan atención en que se brinden las garantías suficientes
de seguridad para los retornos, prevenir los ataques contra ellos e investigar amenazas en su contra y además que sean viables las economías de los campesinos.

Palabras Claves: Restitución de Tierras, Reparaciones, Justicia tradicional, Víctimas, Conflicto, Desplazamiento Forzado, Ley de Víctimas, Compensación Económica.
Introducción

La presente investigación combina análisis cuantitativo y cualitativo y constituye un estudio de las sentencias falladas en el departamento del Meta, lo cual nos lleva a un análisis y a la verificación de los obstáculos que presentan la Restitución de Tierras, mediante la caracterización de la política pública y describen las acciones que desde el Estado se han llevado a cabo en el departamento.

De la misma forma, se usan fuentes primarias y secundarias, optando por la implementación de entrevistas a actores responsables del desarrollo social, y lecturas de libros, documentos y artículos, siendo instrumentos de insumos para elaborar el contenido de la investigación, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siendo una la estrategia de voluntad de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, como mecanismo de la política transicional que facilite el paso hacia un escenario de pos conflicto, esta ley expone como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición. Esta demostración de voluntad es representativa, pero se dificulta su implementación integral, como la formulación de una norma que actualmente presenta varias inconsistencias, pero la aplicación de la misma no implica que tenga una exitosa práctica, menos cuando en Colombia permanece el conflicto armado, político y socioeconómico.

Este estudio pretende que por medio de la Ley 1448 de 2011, analizar en relación con su ámbito la aplicación a partir de sacar conclusiones que sirvan como referentes a la hora de evaluar intenciones a favor de las víctimas fundamentalmente en la zona rural, cuya fuerza resulta ser más retórica que práctica, en tanto se ven limitadas por el modelo de desarrollo económico imperante, que termina por impedir la reparación integral de esas víctimas.
Particularmente es de interés profundizar en el proceso de restitución de tierras y en sus posibilidades reales de alcanzar los objetivos, fortalecer el aparato judicial y administrativo, asistir y reparar a las víctimas, generar condiciones favorables para el establecimiento de la seguridad y la reconciliación.
Planteamiento del problema

El departamento del Meta presenta problemas de tenencia de la tierra como consecuencia por el conflicto armado, con el despojo de tierras en la mayoría de los municipios, presentando en sus propietarios el no deseo de las familias de retornar a su territorio por falta de garantías en seguridad, miedo de represalias por parte de los grupos armados y de los terratenientes actuales de las tierras a quienes les fue sustraída la tierra y entregada a sus verdaderos dueños.

El problema de la Ley de Tierras no es el principio sino la implementación. La violencia colombiana hizo que la propiedad, tenencia y posesión de la tierra haya sido y sea caótica; eso hace que el proceso se anuncie como tortuoso y desde ya se anuncien aspectos de imposibilidad; brindando una grave y falsa expectativa alrededor de los que aspiran a la restitución; también porque el proceso puede revivir pasiones y generar desgarros entre grupos sociales que si bien no ha sido violento, han sido víctimas y beneficiarios de esa violencia.

La violencia ha sido cambiante, y en esa medida los actores que han dominado las zonas también han cambiado. Como en la década de los 70, cuando llegaron los grupos guerrilleros a la zona; FARC, ELN entre otros. Su presencia y el constante asedio a los propietarios dieron lugar a que durante los años 80 muchos de esos dueños perdieran la vida, otros vendieran los predios a precios irrisorios, y unos más simplemente los abandonaran. Esa fue la primera transformación de propietarios, la ocasionada por los grupos guerrilleros. En este contexto compraron quienes eran sus aliados o testaferros, pero también quienes podían convivir con los guerrilleros, entre ellos habitantes de la zona que aprovecharon la situación para invadir y apropiarse de la tierra que había quedado vacía.
Durante los años 90 llegaron los paramilitares y sucedió lo mismo; presiones, asesinatos, extorciones. Los propietarios y poseedores aliados o no de las FARC fueron interpretados como cómplices y también tuvieron que vender y abandonar; nuevos compradores y nuevos invasores aparecieron; los unos por ser aliados de los Paramilitares, otros por no ser amigos de los guerrilleros y unos más sólo por la oportunidad de la coyuntura.

Entre tantos poseedores, dueños, invasores unos con vínculos con los grupos ilegales, unos que aprovecharon libres de toda culpa y la pregunta ante este proceso es ¿a quién se le va a restituir la tierra?. La tendencia parece ser la de favorecer a quienes fueron desplazados por los paramilitares, pues ahí hay un grupo significativo de campesinos y personas de escasos recursos; muchos de ellos invasores que para apropiarse de la tierra aprovecharon sin que en ello haya necesariamente complicidad o mala fe, la llegada de las guerrillas. Con la llegada de los paramilitares muchos de ellos fueron desplazados a favor de terratenientes, antiguos propietarios y nuevos invasores; algunos partidarios a estos grupos ilegales y otros simplemente obteniendo provecho de las circunstancias.

El proceso de restitución de tierras está previsto dentro de la Ley 1448, la cual modifica reglas clásicas del Derecho Civil, al establecer presunciones de ilícito de las compras de tierras en ciertas zonas de violencia y desplazamiento.

Colombia ha vivido una verdadera contrarreforma agraria, ya que el despojo causado por la subversión armada provocó que hubiera una reforma agraria; al igual que el modelo de desarrollo rural de los últimos años, fundado sobre todo en las empresas agroindustriales, no haya sido favorable al campesinado ni a los grupos étnicos.

Esta es la raíz del conflicto social que puede engendrarse bajo la Ley de Tierras, el cual es un proceso demasiado complejo y la ley no tiene las herramientas suficientes para solucionar semejantes situaciones; ya que supuesto intentaran engañar y sacar provecho en medio de tantas dificultades y hace aún más difíciles las cosa al no poder diferenciar los aliados de los grupos ilegales, de los simples beneficiarios pasivos,
provocando que el ser obvio, la identificación del beneficiario, será siempre compleja; dejando desilusiones y desencantos.

La restitución de tierras es la medida preferente para reparar a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo, pero en forma subsidiaria se establece una compensación o el pago de un valor equivalente. Además destaca la Ley que, en la medida de lo posible, la restitución será formal y material, siendo ahí nuestro punto de partida en el análisis y obstáculos que se presentan la restitución de tierras del departamento del Meta. La ley reconoce también el derecho al retorno, sin embargo, no se prevén mecanismos que den participación a la comunidad en estos procesos, vacío éste que podría atribuirse al alto porcentaje de personas desplazadas que en las encuestas al respecto dicen no desear el retorno a sus lugares de origen. Pero en la mayoría de los casos no se trata de un deseo caprichoso sino a la falta de condiciones para un regreso seguro.

En el escenario inaugural de los procesos adelantados al presentarse las primeras solicitudes de restitución por parte de las víctimas, se mantiene la preocupación fundada por la protección de su vida e integridad personal, ante la criminalización de los líderes campesinos por razón de su participación en procesos de exigibilidad del derecho a la tierra, aspecto que revela la continuidad del conflicto y el riesgo al que continúan estando sometidas las víctimas del despojo al pretender materializar sus expectativas de reparación.

Por otra parte, en el derecho internacional se reconoce que la restitución de tierras es un derecho en sí mismo y no depende de que las víctimas retornen. Tienen también el derecho al retorno, pero lo uno es independiente de lo otro; así, que aún si no retornan, el Estado tiene la obligación de restituirles el derecho a la tierra que perdieron, pero cuando la víctima desea el retorno, el Estado debe velar para que éste se produzca en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad, facilitando así, en muchos casos, la restitución material de las tierras y de los territorios, siendo apenas uno de los primeros pasos en el camino hacia el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo y hacia el pleno ejercicio del derecho de los campesinos y
campesinas a permanecer en sus territorios y decidir sobre sus propias posibilidades de desarrollo.

La solución no solo es la devolución de las tierras despojadas a los campesinos, es tan solo una parte del camino, es allí donde el presente anteproyecto centrará su visión en que se brinden las garantías suficientes de seguridad para los retornos, prevenir los ataques contra ellos e investigar amenazas en su contra y además que sean viables las economías de los campesinos.

Los grupos armados al margen de la ley mantiene influencia sobre regiones determinadas del departamento del Meta, esto hace que se dificulte los procesos de restitución de tierras, uno de los factores de vulnerabilidad de la población campesina al desplazamiento forzado y el despojo de sus bienes es que esta población no posee títulos que certifiquen su posesión sobre sus bienes abandonados.

La Ley 1448 tuvo ya importantes efectos positivos sobre la vida pública colombiana. Cambió, así fuera parcialmente, la relación entre el Estado, las víctimas y los victimarios, reconociendo a las primeras; generó un aparato administrativo pro-restitución y pro-población civil, y creó el terreno para que el Estado y la sociedad aprendieran, o recordaran, importantes destrezas en términos de política pública.

No obstante estos, y otros, factores positivos, la Ley debe ser interrogada en sus propios términos. En particular, se propuso desarrollar una política de restitución que tendría que estar terminada al cabo de diez años (Junio 2011 – Junio 2021). ¿Cómo estamos frente al cumplimiento de este objetivo crucial?

La monografía mostrará que la restitución, tal como está diseñada en la actualidad, no sólo está lejos de cumplirla, sino que no lo puede hacer. Al paso que vamos, podría demorarse miles de años, o, introduciendo supuestos extraordinariamente optimistas, cientos. Es el momento de considerar, sería y rápidamente, un rediseño de la política de restitución.
Por ello consideramos que no basta entonces con borrar las consecuencias del despojo por medio de la restitución. Son necesarias medidas complementarias, que logren una mayor equidad; es, pues, imperativo que Colombia adopte una reforma rural integral, como la propuesta por el reciente informe de desarrollo humano del PNUD, que prevea un lugar productivo digno al campesinado y a los grupos étnicos. Pero desafortunadamente algunas de las propuestas gubernamentales parecen ir en la dirección contraria, pues refuerzan el papel de las empresas agroindustriales.
Objetivos

Objetivo General

Detectar los avances e Identificar los obstáculos que presenta la Restitución de Tierras en el Departamento del Meta.

Objetivos Específicos

1. Detectar si se está realizando correctamente la Restitución de Tierras en el Departamento del Meta

2. Identificar las dificultades y falencias del Estado que impiden la Restitución de Tierras

3. Conocer si el proceso de Restitución de Tierras en el Departamento del Meta se está realizando como lo establece la norma.

4. Observar el procedimiento de Restitución de Tierras que se está llevando a cabo en el Departamento del Meta
Justificación

La política actual de restitución de tierras enfrenta múltiples dificultades de orden político, fáctico, normativo e institucional, no sólo impide la devolución de las tierras a las víctimas, sino que profundiza la violencia y re victimización de quienes solicitan al Estado la garantía y respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

La restitución de tierras y los bienes que han sido expropiados a través de la intimidación y la violencia, así como los conflictos derivados de la concentración de la propiedad de la tierra, son factores estructurales para explicar el origen de la violencia política, y en consecuencia, la reparación integral a las víctimas del despojo y el abandono, se constituye en una obligación y deber del Estado Colombiano.

Colombia y el departamento del Meta se caracterizan por una estructura agraria bimodal de latifundio-minifundio, que según el Informe de Desarrollo Humano de 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15% de la población y que el coeficiente de Gini indica que en materia de concentración de tierras en Colombia es de 0,85 escala de 0 a 1. Según el gobierno más del 40% de los predios rurales colombianos no tiene títulos registrados que respalden con certeza la propiedad, haciendo mucho más complicado su proceso al punto de impedir su restitución.

Al punto de ser negado y no por que no tenga derecho, sino en este caso por la falta de garantías de pertenencia, Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado El total de hectáreas despojadas o forzadas al ser abandonadas por causa del desplazamiento en el periodo comprendido entre los años 1980 y julio de 2010 ascendió a cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12.9% de la superficie agropecuaria del país; y es ahí donde el presente anteproyecto recobra vida, ya que ¿Cómo se responsabiliza al Estado de este
despojo masivo tanto por omisión teniendo en cuenta que no se adoptaron medidas para garantizar los derechos de los campesinos a sus tierras y territorios y su incapacidad institucional de protección de los derechos fundamentales de la población rural, como por acción identificando como responsables del desplazamiento forzado a los miembro de la Fuerza Pública?

Por lo tanto, es de vital importancia el realizar un análisis y detectar los obstáculos que presenta la restitución de tierras en el departamento del Meta, para garantizar la reparación integral a las víctimas, como también, el uso, usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio y la identificación de los verdaderos beneficiarios del despojo.

Aclarando la situación, el informe ejecutivo de gestión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Superintendencia de Notariado y Registro, Noviembre 2010-octubre 2011) cita que en San Martín (Meta), se hallaron una serie de irregularidades relacionadas con: ventas masivas, resoluciones falsas del INCODER, actualizaciones de áreas que superan el 100% su cabida inicial y escrituras falsas en 1.400 predios equivalentes a 183.000 hectáreas.

El proceso de restitución se desarrolla fundamentalmente en dos etapas, una administrativa y otra judicial:

- La Unidad de Restitución de Tierras es la responsable de la primera etapa, durante la cual debe recibir las reclamaciones, documentar el caso y determinar si el predio ingresa o no al Registro de Tierras Presuntamente Despojadas o Abandonadas. Adicionalmente, si así lo desea el solicitante, la Unidad puede representarlo en la etapa judicial, para lo cual debe elaborar la demanda que presentará posteriormente ante el juez competente.
- Hasta febrero de 2013 la Unidad de Restitución de tierras en el país, había recibido 32.688 solicitudes, y había adelantado trámites con respecto a 5.393, que corresponden a 246.317 hectáreas reclamadas.
En el desarrollo de la segunda etapa, los jueces o magistrados especializados de restitución deben determinar si el solicitante fue víctima de despojo o abandono forzado y, de ser así, ordenar la restitución del predio o compensarlo si ello no es posible. Hasta hoy se han nombrado 39 jueces, uno itinerante y 15 magistrados. Aproximadamente 1.150 casos están en proceso de decisión judicial.

Aunque hasta el momento se han proferido solo 32 fallos que ordenan la restitución de predios a 135 reclamantes, con respecto a 115 predios, es posible identificar algunos avances y ciertos obstáculos en los procesos a cargo de la Unidad, de los jueces y de los magistrados especializados en restitución.

Frente a este panorama, la pregunta obligada nos lleva a preguntar cuáles son los avances y obstáculos que presenta la restitución de tierras en el departamento del Meta.
Hipótesis

Las Políticas Públicas ha intentado mitigar en cierta forma solucionar el drama del desplazamiento forzado, pero no se ha atacado las causas del conflicto armado, sino sólo se ha dedicado a trabajar en torno a las consecuencias que éste produce y en temporales políticas asistencialistas, en donde el fenómeno del desplazamiento en Colombia es histórico y que hace referencia a la violencia y al conflicto armado, interno del país que lo causa y, que a su vez, permite que la cifra cada vez sea más grande y compleja de analizar.

La mayoría de los programas y políticas implementadas no han tenido la eficiencia requerida, ya que los primeros diagnósticos no terminaban de dar cuenta de la magnitud del problema, y por más buenas intenciones por parte de las entidades que trataban de contrarrestar el drama del desplazamiento, aunque estos esfuerzos no involucren la resolución de las causas y que el enfoque de la política está orientada hacia la atención que hacia la prevención, lo cual podría ser por la magnitud del desplazamiento y la necesidad de atender una población tan numerosa.

Pero no es suficiente con que se aprueben leyes que den luz a la compleja situación, sino que el conflicto armado sigue siendo el principal causante del desplazamiento y que existen intereses por parte de actores del conflicto que se benefician la posesión de las tierras despojadas; también el comprender que esta ley no se construye en el marco de un escenario posconflicto, sino en una dinámica donde el conflicto armado sigue con la misma intensidad y con el agravante de múltiples actores que han ingresado a éste tras la desmovilización de los grupos armados (paramilitares – Guerrilla) y el surgimiento Grupos armados criminales.
1. Reconstrucción normativa y jurisprudencial

Referencia: expediente D-9214, Actores: Orlando Pito Tombe y otros. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 79 (parcial), 88 (parcial) y 132 (parcial) de la Ley 1448 de 2011 ‘por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones.

Magistrada sustanciadora: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013).- La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

1.1 Sentencia C-099/13.

El proceso de restitución de tierras despojadas se encuentran consagrados en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, y son (i) el reconocimiento de la restitución jurídica y material como medida preferente de reparación integral; (ii) el derecho a la restitución opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas; (iii) las medidas previstas buscan alcanzar de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; (iv) las víctimas tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; (v) las medidas de previstas en la ley buscan garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución; (vi) las medidas adoptadas deben adoptarse en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; (vii) se debe garantizar la participación plena de las víctimas; y (viii) se garantiza la prevalencia del derecho a la restitución de las tierras despojadas o abandonadas de manera forzada a las víctimas que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido y a quienes sean los más vulnerables.
En base a lo anterior, es competencia para conocer el proceso de restitución los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, los cuales son especializados en restitución de tierras y son ellos idóneos de decidir en única instancia los procesos de restitución de tierras, a su vez de los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso; conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, estos Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso.

Para el caso de los opositores, estos deberán presentar ante el juez la solicitud efectuada por particular y presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pero el Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento determinará, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar; a su vez, también deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley.

Estas víctimas podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con
el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza.

Pero en el evento en que la víctima acepte que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.
2. **Reconstrucción de derecho comparado**

Referencia: expediente D-896, Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1448 de 2011, artículos 28 numeral 9 (parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2, 4, y 5 (parciales); 73 numeral 1 y 2 (parciales); 74 inciso 6 (parcial); 75 (parcial); 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales); 78 (parcial); 84 parágrafo 2 (parcial); 91 inciso 1 (parcial); 99, 120 inciso 3 y 207. Actor: Gustavo Gallón Giraldo y otros.


2.1 **Sentencia C-715/12**

Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo.

Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, es claro que producen expulsión de la tierra de las víctimas, lo que concibe una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno, razón por la cual la normativa y jurisprudencia a las víctimas de despojo y de abandono, sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado, que en el orden de la Ley
1448 de 2011 y especialmente los artículos que ahora se demandan arts. 28 y 72, dejan ver el carácter asimilable de las víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, que de tal manera son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el marco de la Ley 1448 de 2011, en donde se ve claramente que se cobija los desplazados que abandonaron sus predios por la presión o a la fuerza; de igual forma el registro es el principal instrumento de restitución, lo que significa que el registro es tanto para tierras despojadas como abandonadas forzosamente, que de esta manera no descarta a las tierras abandonadas, dado que ello se entiende de manera tácita.

Si bien a los tenedores víctimas del conflicto, no se les puede aplicar en estricto sentido jurídico del derecho a la restitución de una propiedad o de una posesión, la restitución que procede respecto de los propietarios, los poseedores u ocupantes, de estas víctimas que manifestaban el derecho de tenencia, no quedan del todo desprotegidas frente a su legítimo derecho de reparación integral, el cual no solo incluye la restitución de bienes inmuebles, sino también medidas de indemnización y otros componentes reparatorios, que sin perjuicio de que puedan acudir a la vía judicial ordinaria para la reivindicación de sus derechos.

Las acciones y omisiones con las cuales se infringe, las prohibiciones y los deberes que imponen las disposiciones aplicables a los conflictos armados. La gravedad de las infracciones alude al carácter especialmente injusto que reviste el acto con el cual se da lugar a la misma, y por la magnitud del impacto negativo que se produce sobre las condiciones necesarias para salvaguardar la dignidad humana.
3 Reconstrucción teórico-conceptual

3.1 Sentencia C-253A/12

Si bien, que para los demandantes, los límites temporales impuestos en los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011, dan lugar a un trato discriminatorio, restringen de manera desproporcionada y sin fundamentación suficiente los derechos de quienes se han visto afectados por actos de violencia, tal como ha sido definido en la jurisprudencia constitucional y en los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que para la Corte, desde la perspectiva de la potestad de configuración del legislador para el diseño de procesos de justicia transicional y la eventual afectación del principio de igualdad que ello pudiera provocar, las expresiones acusadas, relacionadas con límites temporales de aplicación de la Ley resultan exequibles y, mediante la Sentencia C-250 de 2012, se declara la asequibilidad de las expresiones, contenida en el artículo tercero de la Ley 1448 de 2011, y el término de vigencia de la ley contenida en el artículo 75 de la misma ley, y habida cuenta que los cargos examinados parten de las mismas consideraciones que dieron lugar al citado pronunciamiento, ha operado la cosa juzgada constitucional, que en igual sentido las expresiones por hechos ocurridos y contenidos en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, simbolizan y hacen parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizados.

Pero, lo que hace la ley 1448 de 2011 no es definir ni modificar el concepto de víctima, sino identificar, que dentro del universo de las víctimas, en el contexto de la ley como toda persona que haya sufrido menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta antijurídica, implica que se reconoce la existencia de víctimas distintas de aquellas que se consideran tales para los efectos de esta ley en particular, que serán las destinatarias de las medidas especiales contenidas en la ley. Las medidas de apoyo no sustituyen los procesos penales dentro de los cuales deben tramitarse las
pretensiones de verdad y de justicia de las víctimas, y, eventualmente, también de reparación, ni establecen nuevas instancias, o procedimientos especiales, sino que, en general, contienen previsiones de apoyo a las víctimas, para que puedan actuar de mejor manera en estos procesos.

La delimitación operativa que se hace en la ley no se desprende que quienes no encajen en los criterios allí señalados dejen de ser reconocidos como víctimas. Si no que haya sufrido un daño como resultado de actos de delincuencia común, es una víctima conforme a los estándares generales del concepto, y lo que ocurre es que no accede a las medidas especiales de protección previstas en la ley. Lo mismo sucede con personas que hayan sufrido un daño con anterioridad a 1985 o con quienes se vean de manera expresa excluidas del ámbito de aplicación de la ley por factores distintos, por lo que no pierden su reconocimiento como víctimas, ni quedan privados de la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios que se han establecido en la legislación ordinaria para que se investiguen y persigan los delitos, se establezca la verdad, se sancione a los responsables y se repare de manera integral a las víctimas, sólo que en razón de los límites o exclusiones que contiene la ley, esas personas no tienen acceso a las medidas especiales de protección que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional.
4 Marco teórico

Durante las décadas de 1950 y 1960 el desplazamiento forzado en Colombia provocó un cambio en el ordenamiento regional del país. Este fenómeno comenzó a partir de la conformación de las guerrillas liberales, que surgieron como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno conservador entre 1946 y 1953 y al asesinato del candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, que dio origen a un periodo largo de violencia política (Defensoría del Pueblo, 2004). Posteriormente, la economía del narcotráfico marco un hito en el desarrollo del conflicto armado y en la colonización de tierras, imponiendo en muchas partes del país reglas de convivencia ante la ausencia del Estado y provocando un aumento significativo del fenómeno del desplazamiento.

Para 1997 se estimaba que 4 millones de hectáreas se encontraban en propiedad de narcotraficantes (Sandoval, 1999), quienes de acuerdo con sus intereses realizaban alianzas con grupos de autodefensas ilegales, para contener a la guerrilla, mientras que en otras zonas, el sistema tributario que la guerrilla imponía a estas actividades le servía para financiarse.¹

En los últimos diez años la magnitud del desplazamiento forzado ha sido creciente, como también es mucho más amplio su reconocimiento, la adopción de los avances internacionales en el tema y las labores de ONG’s colombianas y extranjeras para visualizarlo y pedirle al Estado una acción eficiente para su prevención y atención.

En Colombia las áreas rurales de mayor potencial ya están ocupadas, las demás son áreas donde es difícil adelantar un desarrollo productivo y familiar aceptable, lo que obliga al desplazado a asumir como refugios los barrios de las grandes ciudades.

La gravedad de esta situación llevó a la expedición de la ley 1448 de 2011, por la cual se buscó adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención y protección de los desplazados, consagrándolo como principales derechos de las

¹file://DialnetLaRestitucionDeTierrasEnColombiaExpectativasYRetos-4278470.pdf
personas que en dicha situación es el regreso a su lugar de origen, la posibilidad de recibir ayuda internacional, el derecho a no ser discriminado por su condición social de desplazado, su libertad de movimiento sin restricciones, entre otros. Según datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), las tasas más altas de desplazamiento forzado se dieron en las regiones del Ariari y Mapiripán. En la primera región, especialmente en Puerto Rico, Vistahermosa y Uribe, se concentraron los operativos de la Fuerza Pública, generando un incremento de amenazas de las FARC para impedir la colaboración de los habitantes con los actores gubernamentales: adicionalmente, las minas representan uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras y la aplicación de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011.

Como señala un funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el municipio de Vistahermosa – Meta, existen más de 500 solicitudes de restitución de tierras, pero el 40 % o 50 % de esos predios puede tener sospechas de la presencia de minas.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, según el VI Informe a la Corte Constitucional de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, refieren a un despojo de tierras a causa del conflicto armado de cerca de 1,2 millones hasta 10 millones de hectáreas, en donde esta extensión fue acumulada ilegalmente por paramilitares mediante el robo de tierras, su venta forzada, el desplazamiento y el despojo. Abandono o Despojo Forzado de Tierras: Según el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, entendiéndose como la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el período establecido.
Mediante el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011, se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: i) Atención Inmediata; ii) Atención Humanitaria de Emergencia; y, iii) Atención Humanitaria de Transición. Las víctimas de que trata el Artículo 3º de la 1448 de 2011, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma. Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica. Velar que mediante el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 se brinde la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. Bajo el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, se garantiza que la ayuda humanitaria que se entregue a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.

4.1 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado: “VI Informe a la Corte Constitucional”. 2008.

Existen varias estimaciones sobre la cantidad de tierra despojada en el marco del conflicto armado: van desde 1,2 millones hasta 10 millones de hectáreas, según el VI Informe a la Corte Constitucional de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. La mayor parte de esta extensión fue acumulada
ilegalmente por paramilitares mediante el robo de tierras, su venta forzada, el desplazamiento y el despojo.


El poder político es “la regulación centralizada y territorial de la vida social”. Aunque Mann cree que solo el Estado puede lograr ese poder “centralizado y territorial”, aquí adoptaré la hipótesis de que un grupo armado ilegal también puede obtener algún grado de control en el plano local.


En Colombia, la tierra es un recurso altamente valorado. El propio conflicto armado gira en torno del acceso a la tierra: sus raíces, sus fuentes de reproducción, su continuidad… hasta su terminación negociada. El origen y la evolución de las FARC, la colonización de los baldíos, los cultivos de coca, el desplazamiento: todo tiene algo que ver con la tierra.

No he encontrado una forma más precisa de expresar este hecho que las palabras de Alejandro Reyes: “El control de la tierra ha sido la fuente de acumulación de riqueza y poder de más larga duración en la historia colombiana” (Reyes Posada, Alejandro:

A medida que Fidel Castaño y otros narcotraficantes en Córdoba fueron acumulando tierras, se fueron convirtiendo en una élite emergente. Por lo tanto se ubicaron en la parte alta de la estructura social local. Pero eso es solo parte de la historia.

5 Reparación administrativa: de las víctimas menores de dieciocho años

La ley 1448/11 y el decreto 4800/11 reglamentario contemplan que los niños, jóvenes y adolescentes serán indemnizados por un monto de 30 salarios mínimos legales mensuales. A su vez, el gobierno colombiano expidió el Código de la Infancia la Niñez y Adolescencia ratificando que el gobierno y todas sus autoridades deberán atender prioritariamente a esta población y en caso de colisión entre normas se deberá optar por la norma más favorable. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas hay 1.794.707 menores de 18 años que indemnizados bajo la regla mencionada, significaría que a cada uno se le deberá otorgar un monto de $17 millones para un total de $30,5 billones, cifra que los Conpes no reconocen porque asumen que la indemnización se hace por grupo familiar, particularmente el Conpes 3726 establece como meta que al año 2021 serán 41.068 niños, niñas y adolescentes indemnizados con encargo fiduciario, es decir el 2,3% de la población actualmente registrada en el RUV. Es bueno aclarar que no se trata de una ilegalidad sino de un vacío de interpretación legal como de voluntad política a la hora de reparar.

5.1 De las víctimas adultas:

Finalmente, si aceptamos el número de hechos victimizantes reportados por el Conpes 3712/11, es decir, 618.000 familias por desplazamiento forzado y 212.000 por otros hechos victimizantes y multiplicados por el monto en salarios mínimos que reconoce el decreto 4800/11 para cada hecho victimizante, serían necesarios $10,6 billones, sin embargo, la tabla final que presenta el mismo Conpes reporta un total de $6,4 billones únicamente, de manera que presenta un déficit inicial de $4,1 billones, que es mucho más grande, si consideramos que al 31 de junio el número de familias víctimas del desplazamiento es de un millón, lo que elevaría el monto de indemnización administrativa a $14,2 billones y el déficit a $7,8 billones en el periodo de los diez años.
Por todo lo anterior, es necesario que haya más transparencia por parte del Gobierno a la hora de divulgar y ejecutar la política de atención y reparación a las víctimas. No es admisible entonces la afirmación del Gobierno cuando sostiene que para el presupuesto de 2013 se asignará $6,2 billones (el 10% de lo presupuestado para los diez años), cuando en realidad se trata de sólo $3,8 billones descontado el SGP.

5.2 Edición N° 00322 – Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2012:

Sus opiniones no comprometen a la institución para la cual trabaja. De acuerdo con el art. 150 del Decreto 4800/11, los hechos victimizantes son el desplazamiento, el homicidio, las lesiones personales que generan incapacidad permanente y sin incapacidad permanente, el secuestro, el reclutamiento de menores, los delitos sexuales. DNP. (2011). Conpes 3712. Plan de financiación para la sostenibilidad de la ley 1448 de 2011. Bogotá, D.C

El artículo 63 de la Ley 1448 de 2011, establece que las ayudas humanitarias sean entregadas a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.

Implementación de los procedimientos de restitución de derechos territoriales étnicos establecidos en los Decretos Ley 4633 para las Comunidades Indígenas y 4635 de 2011 para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras respectivamente. El proceso de restitución tiene como objetivo lograr que las comunidades vuelvan a gozar de todos sus derechos territoriales, independientemente de su relación formal con la tierra, es decir, pueden ser territorios titulados o no, o en trámite de titulación o reconocimiento, en todos los casos se puede acceder al derecho a la restitución.

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación integral que se establecen en la presente ley, Art. 13 Ley 1448 de 2011.

El artículo 23 de la Ley 734 de 2002, establece “como la violación de deberes, extralimitación en el ejercicio de las funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sin estar amparado en causales de exclusión de responsabilidad y siempre y cuando, sin justificación alguna, se afecte con ello el deber funcional del servidor.”

Garantías de No Repetición: Se establece una serie de medidas para evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre estas se encuentran: la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de reconciliación social e individual y la participación del sector privado en generación de proyectos productivos.

LEY 1448 de 2012: creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país.

Medidas de Satisfacción: Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras el artículo 139: a) Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; b) Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior. c) Realización de actos conmemorativos; d) Realización de reconocimientos públicos e) El esclarecimiento de la verdad y su difusión f) La investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables.

En el sentido del Decreto 4829 de 2011, en su artículo 4° establece que el gobierno nacional regulará una instancia de carácter operativo a nivel local para adelantar la microfocalización por municipios, veredas y corregimientos para la implementación
gradual y progresiva del proceso de restitución de tierras. En cumplimiento de dicho mandato reglamentario, el gobierno nacional expidió el Decreto 599 de 2012 mediante el cual asigna la responsabilidad de microfocalización en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida en el Ministerio de Defensa Nacional.

Según el Art. 5 de la Ley 1448 de 2011 “El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba” (...
6 Validación de la hipótesis

El acopio, clasificación, sistematización y análisis de sentencias de Restitución de Tierras emitidas y tendientes a abordar la forma en la que el Juez o Magistrado decide un Problema Jurídico relacionado con el despojo o abandono forzado de tierras; para lo cual se partirá de diseño de una matriz, mediante la cual se identifique aspectos de Decisión del Juez acerca de la formalización o la Restitución de Tierra, qué derechos concede el Juez y qué ordena a las entidades del Estado para generar una Reparación Integral, para ello se tomará muy presente la aplicación de las normas de justicia transicional, como los DDHH y DIH; además qué y cómo entiende el Juez “Justicia Transicional”, Garantía del debido proceso del opositor y Derechos de Terceros, Hectáreas Formalizadas y/o Restituidas, papel del Juez y de la Unidad de Restitución de Tierras en estos procesos.

En Colombia se afectaron cerca de 1,2 millones hasta 10 millones de hectáreas, de las cuales 6 millones fueron despojadas cerca de 300 mil familias por violencia, factor que predomina en el despojo o abandono de las tierras es el valor de la tierra, la fertilidad de los terrenos, el conflicto como espacio para sembrar base social, estos obligaban a transferir los derechos de la tierra, con un poder que no existe, apropiándose de hectáreas, por el mismo desalojo o porque fueron abandonadas por temor, aprovechando la informalidad en la tenencia de la tierra, y si no hay rastros de propiedad es más fácil el despojo.

La Unidad para la Gestión y Reparación Integral de las Víctimas, nace con la ley 1448 de 2011 y creada mediante el decreto 4802 de 2013, la cual Defiende y Vela por Devolver la Propiedad, Interviene en las propiedades donde hay Conflicto, Acompaña a la población desplazada a su lugar de origen, Recibe reclamaciones a los despojados y Organiza la evidencia probatoria a las Victima para que el juez pueda fallar, Acompañar a las víctimas en el proceso judicial y Da cumplimiento de las sentencias proferidas.
El Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas está conformado por 42 entidades de orden nacional, y coordinación nación territorio con Asistencia humanitaria inmediata, subsidiaridad, Asistencia social como cupos estudiantiles, salud, seguridad entre otros.; es así que la prueba de la propiedad “título del predio”; el gobierno nacional entrelazo entidades como catastro y registro de instrumentos públicos, para acceder a la base de datos para verificar las propiedades, cuando no existe registro catastral, se empieza con un ingeniero catastral a encontrar la tierra de ese campesino por ríos, caseríos, desembocadero del rio, y ubicar donde esta ese predio. Se organiza la prueba del despojo o abandono forzado en qué año fue, donde, quien los despojo, corroborar la información, buscar las pruebas como; reportes de prensa, informes de seguridad, informe de alertas tempranas, informe de la fiscalía, y se arma el paquete que si había conflicto en esa zona, ya obtenida la prueba, de le pregunta a la víctima ¿Qué paso con usted?, ¿lo obligaron a vender? Se cree en la víctima principio de buena fe, esa información que da la víctima la llevamos a la zona y donde están los predios empezamos a dialogar con las comunidades y a validar los linderos que dio la víctima; si es el caso afirmativo hay dos opciones: Que la Unidad de Restitución de Tierras represente a la víctima ante un juez o que la víctima lo represente un abogado de su confianza. Después se debe Mirar la seguridad de la zona para el proceso de restitución, quienes se oponen, los que se robaron las tierras con amenazas, el tiempo de esta etapa es de 60 días para recoger la etapa probatoria, y la Demandas de los jueces tienen 4 meses para fallar, si tiene opositor ese proceso pasa a una sala de tribunal.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la encargada de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado; entregar la ayuda humanitaria a quienes por el hecho de ser víctima requieran inmediatamente y coordinar el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En primer lugar se realiza el Proceso de identificación, Se Verifica que este en el registro único de víctimas o en el registro único de población desplazada, posteriormente se diseña del plan de retorno de cada familia o reubicarlo, se moviliza la oferta del sistema de la unidad de restitución de tierras, se facilita el acceso a la educación, salud, seguridad además Las víctimas que están retornando tienen derecho a acceder a
subsidios de vivienda rural, el tema de seguridad importante en el proceso de reparación, si no hay salud, educación ni vías ese proyecto no se ve bien. Es decir a la familia restituida se le debe garantizar muchos aspectos que son fundamentales para que no haya repetición de los hechos.

En dos años y medio de la implementación de la ley 1448 de 2011, muestra logros significativos, pero también grandes problemas que deben ser superados para cumplir la meta de restablecer en diez años los derechos de todos los ciudadanos que a partir de enero de 1991 fueron despojados de sus tierras o las abandonarlas por causa de la conflicto armado.

Los logros principalmente son del capital humano e institucional ya que se ha construido en pocos tiempo la operación del sistema en sus fases administrativa y judicial, resultado de esto son las sentencias emitidas, las familias beneficiadas, los predios restituidos.

Las dificultades se deben a que se obstaculiza el acceso de las víctimas al sistema y frenan el trámite interno de las solicitudes de restitución. Se observa una pérdida de oportunidades al no aplicar como rutas preferentes de la restitución colectiva y administrativa. Además, en la adjudicación de baldíos se observan casos de una errada interpretación de la ley, que facilita la acumulación ilegal de tierras.

Se analizaron 25 sentencias publicadas desde el mes de abril de 2013 hasta el mes de febrero de 2014, en actos administrativos e indicadores de desempeño publicados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) del departamento del Meta.

\[\text{Informe Fundación Forjando Futuro}\]
Conclusiones

La Ley 1448 establece que cuando la restitución es imposible por razones de seguridad que impiden el retorno, se debe compensar a la víctima con otro predio o en dinero.

En la implementación del proceso de restitución de tierras se ha presentado descoordinación entre las entidades encargadas del proceso.

La micro focalización no garantiza que las condiciones de seguridad se mantendrán en el momento de la restitución y en el futuro.

Las metas establecidas por el gobierno para el proceso de restitución de tierras, difícilmente se cumplirá debido a que el avance es lento, la comunicación entre las entidades no tiene la mejor articulación, y por otro lado se está reparando a las víctimas en medio del conflicto.

El Gobierno Nacional debe coordinar y planificar con los departamentos, los municipios y las organizaciones de víctimas la seguridad en las zonas a restituir.

Es importante mantener un proceso de información y capacitación constante en Ley de víctimas y Restitución de Tierras, en busca de informar a toda la población víctima del conflicto armado asentada en los municipios.
Bibliografía


Constitución política de Colombia, (1991)


